

Juez de 1ª instancia de Ixmiquilpan, es la autoridad competente para conocer en esa localidad, de los delitos como los que se atribuyen á los peticionarios; que ha obrado en la órbita de sus atribuciones, al abrir el proceso hasta pronunciar la sentencia, sometida hoy á la revision del Tribunal Superior del Estado: sus procedimientos no importan violacion alguna de las garantías aducidas por los peticionarios en su escrito de queja. Con tales fundamentos se decretar: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Hidalgo, que otorgó el amparo á los quejosos, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á María de la Luz Torres y á Evaristo Ramos, en las garantías á que se refiere el presente juicio. Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 23 de 1873.—*Lic Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por D. Juvencio Hernandez, quejándose de que su hermano D. Juan, fué remitido preso á Guadaluajara por el gefe político de San Luis, en virtud de un oficio que le dirigió el C. gefe político de aquel partido.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito del Estado:

El Promotor dice: que acordada por este Juzgado la suspension del acto reclamado por Juvencio Hernandez, á nombre de su hermano Juan, del mismo apellido, que con motivo de un simple oficio fué remitido por el gefe político de esta capital al de la ciudad de Guadalcázar; tuvo vd. á bien pedir á la autoridad ejecutora, el informe justificado que previene el art. 99 de la ley de 20 de Enero de 1869, y es el constante á la foja 10 de esta pieza.

Por ese dicho informe, segun se ve, aquel funcionario no se refiere á mas dato para haber remitido á Hernandez, que al simple oficio con que fué pedido por el gefe político Araujo, á quien supone en la posibilidad absoluta de haber podido obrar, como lo hizo, atento lo prevenido en la frac. 5ª del art. 11 del decreto núm. 89 de la actual H. Legislatura.

En el caso presente ninguna aplicacion puede hacerse de lo que en aquel se previene, porque si bien es cierto que los gefes políticos en virtud de tal atribucion, pueden expedir órdenes de arresto de alguna persona, solo es cuando lo exija el bien público ó la pronta administracion de justicia, y bajo la restriccion de que el aprehendido debe ser puesto á disposicion del Juez competente dentro de 48 horas; mas ni una ni otra cosa ocurría á la vez, supuesto que Hernandez viviendo tranquilo

en esta ciudad, no ha sido requerido por la autoridad propia que debe conocer de los delitos en que el Gefe político Araujo funde su oficio requisitorio, ni tampoco se le pidió auxilio alguno, ni este, caso de que hubiera sido necesario, se recabó directamente, como muy bien pudo y convenia, ocurriéndose á cualquiera autoridad de la capital.

Se deja entender por lo mismo, que el citado Gefe político Araujo, apropiándose de un celo que en nada lo disculpa y antes bien lo presenta como ligero en el modo de proceder, se abrogó facultades ajenas que ni se lo habian transmitido ni podia poner en ejercicio sin invadir, como lo hizo, las de la autoridad natural y competente, que es la judicial, única que debe conocer de los delitos que se atribuyen á Hernandez.

Mal pudo tambien la autoridad política de la Capital, en virtud del simple oficio con que se le pidió la remision de aquel individuo, haber hecho esto cuando ni venia en los términos debidos ni procedia de un origen legal; lo que hace creer que dicha autoridad ignora, no solo las relaciones oficiales sino las leyes que arreglan el orden de procedimientos, y aun las obligaciones y deberes que incumben á su representacion y carácter, y por lo mismo, ha podido tambien mal violar las garantías de una persona que como Hernandez, ni ha llamado la atencion pública ni ha sido reclamado por la autoridad competente, ó si es que es cierto lo que asienta en el final de su primer informe de fojas 4 el Sr. Muro, entonces surge la consideracion de que con toda ciencia y conocimiento abusó de sus facultades al remitir al peticionario, toda vez que como dice, no ignora las relaciones oficiales ni las leyes que nos rigen, porque por estas, bien detalladas están las prerogativas de los ciudadanos y las de los mismos reos, que no por ser responsables dejan de tener derechos y esas mismas prerogativas, al juzgárseles por sus delitos cometidos.

Es por tanto inconcuso, que en Juan Hernandez han sido violadas en su persona bien sea como simple ciudadano ó bien como presunto reo, las garantías otorgadas por los art. 12, 16, 17 y 21 de la Constitución federal de la República, y la autoridad federal está en el caso de dispensarlo el amparo que solicita y es lo que pide el Ministerio, siempre que su parecer sea conforme á justicia, pues lo sujeta al mas ilustrado de ese juzgado.

San Luis Potosí. Abril, 24 de 1873.—  
*Gregorio Vazquez.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

San Luis Potosí, Abril 30 de 1873.—  
Visto este juicio de amparo promovido por el C. Juvencio J. Hernandez, contra el acto del C. jefe político del partido de la capital, que en virtud de un simple oficio del de Guadalcázar, aprehendió y remitió á la cabecera de este último partido, al C. Juan P. Hernandez hermano del solicitante; el curso del actor; los informes de la autoridad ejecutora del acto reclamado y pedimentos del representante del ministerio público y lo demas que consta de autos, se tuvo presente y ver convino; considerando: que no ha debido cumplimentarse el oficio del C. Gefe político de Guadalcázar, primero, porque no es la autoridad competente en el caso para proceder en lo relativo á los delitos de infidencia, robo, indemnizacion por heridas y peculado, que se atribuyen en el, al C. Juan P. Hernandez, sino la judicial, como está preestablecido en las leyes de 6 de Diciembre de 1856, 5 de Enero de 1857 y circular de 28 de Febrero próximo pasado; y segundo, porque no se funda y motiva en dicho oficio la causa legal del procedimiento, pues no basta enumerar delitos y atribuirlos á persona determinada, sino que es sustancial fundar su preexistencia, refiriéndose y exponiendo las constancias de la causa ó proceso formado al efecto, ó bien

las diligencias indispensables, lo cual no se verifica en el oficio en cuestion y su cumplimiento es contra lo prevenido en la circular de 30 de Noviembre próximo pasado. Que no es aceptable la razon que alega el C. jefe político de esta capital, de haber procedido siguiendo la *práctica legal establecida*, de auxiliar á las autoridades requerentes en la aprehencion de los reos prófugos, sin mas que las indicaciones de esas autoridades y *sin investigar si tiene ó no razones fundadas para pedir las mismas aprehensiones*; porque esto es exactamente opuesto al precepto consignado en el artículo 16 de la Constitucion, que se ha violado en la persona de Juan P. Hernandez, con el acto objeto de esta queja. Por tales consideraciones, por los fundamentos legales expresados y el artículo 101, fraccion 1ª de la misma Constitucion, debia declarar y declarar de conformidad en parte con lo pedido por el C. promotor fiscal, que: la Justicia de la Union ampara y protege á Juan P. Hernandez, contra el acto del C. jefe político del partido de esta capital, que en virtud de un simple oficio del de Guadalcázar, le aprehendió y remitió á la cabecera de ese último partido. Hágase saber, publíquese en los periódicos y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Union para su revision. Así lo decretó y firmó el C. Lic. Conrado Diaz Soto, Juez de Distrito del Estado.—Damos Fé—(Firmado)—*Conrado Diaz Soto.—Bernardo Galindo.—Antonio R. Jimenez.*

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Abril 30 de 1873.—*Conrado Diaz Soto.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 20 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Juvenio Hernandez ante el juzgado de Distrito de S. Luis Potosí, quejándose de que su hermano D. Juan Hernandez fué remitido

preso á Guadalcázar por el Gefe político de S. Luis, en virtud de un oficio que le dirigió el Gefe político de aquel Partido, con cuyo acto cree el quejoso vulneradas en la persona de su hermano las garantías á que se refieren los artículos 13 en su primera parte, y 16, 17 y 21 de la Constitucion federal; y considerando: que en el caso no se trata de que D. Juan Hernandez sea juzgado por leyes privativas ni por tribunal especial, á lo que se refiere la primera parte del artículo 13 de la Constitucion. Considerando, respecto de la garantía contenida en el artículo 16: que los Gefes políticos tienen facultad de promover y proceder en su caso á la aprehension de personas que se reputen culpables; que tampoco se trata en el caso de una prision por deuda de un caracter civil, ni de ejercer violencia para reclamar un derecho, ni de que los tribunales no esten expeditos para administrar justicia, ni de que esta sea gratuita, á lo que se refiere el artículo 17; que en el caso tampoco se trata de aplicar una pena propiamente tal, así como tampoco de imposicion de multa ni de reclusion correccional, que es á lo que se refiere el artículo 21, y por consiguiente que no se han vulnerado en la persona de D. Juan Hernandez las garantías individuales respecto de las que su hermano pide el amparo; por lo expuesto, y de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la misma Constitucion, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 30 de Abril último por el Juez de Distrito de S. Luis Potosí que concede el amparo, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Juan Hernandez, contra el acto del Gefe político del partido de esa Capital, que en virtud del oficio del de Guadalcázar, aprehendió á Hernandez y lo remitió á la Jefatura de este último partido.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archí-

vose á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*J. M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 26 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. Loaiza y Bustamante, contra el C. Administrador de la Aduana de Guaymas, que les exige el derecho de exportacion de una cantidad de plata acuñada.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal, en este juicio de amparo promovido por los Sres. Loaiza y Bustamante, contra el C. Administrador de esta Aduana marítima, por exigirles el derecho de exportacion sin que esta se haya verificado de una cantidad de plata amonedada que han recibido de Hermosillo, no hará mas que repetir y ratificar lo que ya ha dicho en otros juicios de igual naturaleza que aun están pendientes de su resolucion en ese Juzgado.

Para la extraccion del derecho de exportacion, se debe tener presente la última ley de 31 de Mayo del año próximo pasado, y se debe cumplir con sus terminantes preceptos que en su opinion son muy claros, porque señalan tanto la cantidad de ese impues-

to que es el 5 por ciento, como del tiempo en que esto debe hacerse, que es cuando se verifique su exportacion; el querer hacer lo contrario, es incurrir en una responsabilidad y dar lugar á que la justicia federal proteja y ampare á los que se crean agraviados, como sucede en el presente caso, supuesto que el C. Administrador de la Aduana ha exigido ya esos derechos de exportacion, sin que aun todavia se haya efectuado ésta, y para que no tenga efecto tal procedimiento, pido á V. que se acceda al amparo que solicitan los quejosos. Protesto &c.

Guaymas de Zaragoza, Marzo 3 de 1873.—*Lic. José Monteverde.*

## *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guaymas, Marzo 25 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por los Sres. Loaiza y Bustamante, contra la Administracion de la Aduana marítima, por el cobro que les ha hecho del derecho de exportacion sobre \$2.500 al introducirse á este puerto, por error violada con él la garantía que les otorga el artículo 49 de la Constitucion general de la República, y considerando: que ni la ley de 9 de Diciembre de 1871 suponiéndola vigente, ni la de 31 de Mayo de 1872, únicas en que dicha autoridad apoya el procedimiento, autorizan el mencionado cobro, porque la primera dispone que se haga en el lugar de la extraccion (en el caso, la ciudad de Hermosillo) y la segunda á la exportacion de los caudales, envolviendo en consecuencia el acto reclamado, como extraño á aquella disposicion y contrario á esta, la violacion de que se quejan los actores; por tales consideraciones, de conformidad con la voz del Ministerio público y con fundamento de los artículos 59, 101 y 102 de la citada Constitucion y de los 13 y 27 de la ley orgánica relativa de 20 de Enero de 1869, este juzgado falla: primero; la Justicia de la Union ampara y protege á la casa de comercio Loaiza